

C.A. de Santiago

Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

A los folios 21, 22 y 23; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Celeste Ruarte Caamaño, abogada, quien interpone recurso de amparo en favor de Carlos Edwerd Trujillo Cuero, ciudadano de nacionalidad colombiana, pasaporte N°AT770182, ambos domiciliados para estos efectos en Doctor Sótero del Río N°508, Oficina 411, comuna de Santiago, y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el acto que considera ilegal y arbitrario.

Funda el recurso expresando que el amparado ingresó a Chile con fecha 01 de mayo de 2017, por paso habilitado. Refiere que dicho ingreso ocurrió con posterioridad al que efectuó su pareja junto a la hija común. Añade que, habiendo alcanzado estabilidad en el país, durante 2020 nació una segunda hija. Luego, indica que el amparado solicitó visa sujeta a contrato durante el año 2017. Cuestiona que en dicha oportunidad la solicitud se haya registrado con una individualización errónea del amparado (se le singulariza como “Eduardo” y no “Edwrđ”). Señala que dicha petición fue rechazada, y con fecha 24 de mayo de 2018 solicitó la reconsideración de la decisión, incluyendo documento denominado “ampliación de antecedentes penales”, los que, según indica, acreditan que” el Juzgado 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad decreta Extinción del delito de Violación a la ley 30/86; y el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Prescribe el delito de Porte Ilegal de Armas.”

Agrega que, durante la tramitación de dicha petición, la Administración requirió antecedentes adicionales, los que no pudo adjuntar, pues, según indica, una funcionaria – que no singulariza – no le habría recibido materialmente los documentos. Refiere que, mediante Resolución Exenta N° 29605, de 29 de enero de 2019, de Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública procedió al rechazo de la solicitud de reconsideración, en razón que el amparado poseía antecedentes penales. Cuestiona que la autoridad no tomó en consideración

que dichos antecedentes penales datan del año 1999 y a través de la Ampliación de Antecedentes Penales, de fecha 10 de noviembre de 2017, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal e Interpol es posible desprender a simple vista que respecto del delito de Violación a la ley 30/86 se decretó Extinción y respecto del delito de Porte Ilegal de Armas se declaró Prescripción.

Prosigue señalando que, paralelamente, en el año 2018, don Carlos Trujillo solicitó una visa mediante el proceso de Regularización Extraordinaria. Esta solicitud fue rechazada mediante Resolución Exenta N°82.250 de fecha 28 de marzo de 2019 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, manteniéndose vigente la medida de abandono del país dispuesta por la Resolución Exenta N°29.605, ya citada. Con posterioridad, efectuó solicitud de regularización migratoria extraordinaria, año 2021, con fecha 14 de octubre de 2021, de la cual no ha recibido respuesta al tiempo del recurso.

En cuanto a la situación migratoria actual del amparado, expresa que, con fecha 23 de marzo de 2022, fue notificado de la medida de expulsión por el Decreto Exento N°5.157 de fecha 30 de diciembre del año 2021, emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fundado en los artículos 67 inciso final, 84, 89 y 90 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, del Ministerio del Interior, que Establece Normas de extranjeros en Chile, en los artículos 142 bis inciso final, 167, 173, 174 y 175 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento de Extranjería; y en la Resolución N°17 de fecha 28 de diciembre de 2020 de la Contraloría General de la República. Cuestiona que la recurrida no haya considerado el arraigo familiar del amparado, el hecho que tiene una hija nacida en Chile, y que el amparado se desempeña como principal sostén económico del grupo familiar.

En cuanto al fondo, argumenta que se ha vulnerado la libertad personal del amparado, toda vez que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el acto arbitrario e ilegal de la dictación del Decreto Exento N°5.157 de fecha 30 de diciembre de 2021, decreta una Orden de Expulsión en razón de antecedentes penales extintos prescritos y debidamente acreditados, además solo citan las normas sin elaborar una fundamentación adecuada y sin realizar una ponderación sobre el acto que está

dictando. Lo anterior, a pesar de cumplir el amparado con todos los requisitos para el otorgamiento de las distintas solicitudes realizadas desde su llegada a Chile, específicamente haber acreditado los documentos que dan fe de lo solicitado por la legislación nacional, y en especial acreditando el hecho de no encontrarse afecto a ninguna condena penal vigente en su país de origen, como se demostró en su oportunidad, con su certificado de antecedentes ampliado. Además, considera que la medida es desproporcionada, y vulnera el principio de unidad familiar.

Finalmente, solicita acoger el recurso y restaurar el imperio del derecho, declarando la nulidad del Decreto Exento número 5.157 que ordena la expulsión del amparado, por constituir este acto una amenaza a su libertad individual y seguridad personal; y ordenar al Ministerio del Interior, a través del Servicio Nacional de Migraciones, otorgar una respuesta favorable a la solicitud de regularización migratoria admitida a trámite por Resolución Exenta N°21184026 del Servicio Nacional de Migraciones, y que el grupo familiar pueda permanecer unido en el país; o bien adoptar las medidas que esta Corte, considere pertinentes para corregir la vulneración indicada

Segundo: Que, evacuando informe, comparece doña Nicole del Pilar Sánchez Retamal, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo del recurso en todos sus partes, toda vez que el acto impugnado fue dictado por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones legales, en la forma prescrita por la ley, y con pleno respeto a las garantías contenidas en la Constitución.

Al respecto, expone que, con fecha 1 de mayo de 2017 el extranjero registra ingreso al país por paso fronterizo “Carretera Chacalluta”, obteniendo un permiso de turismo desde el día 1 de mayo de 2017 al día 30 de julio de 2017. Posteriormente, con fecha 18 de julio de 2017, solicita visación de residencia temporaria, por lo que la Gobernación Provincia Cordillera solicita, mediante Oficio Ordinario, que concurra al Consulado Colombiano con la finalidad de ampliar sus antecedentes judiciales y realizar las gestiones pertinentes para que dichos antecedentes sean remitidos a la autoridad migratoria, antecedentes que son recepcionados.

Luego, mediante Resolución Exenta N° 57597, de fecha 19 de febrero de 2018, se rechaza la solicitud de visación, por contar con antecedentes penales en su país de



origen por el delito de tráfico de estupefacientes, siendo condenado a una pena de 15 meses y 10 días de prisión por este hecho. Junto con ello, la autoridad toma conocimiento igual de la condena a 1 año de prisión por el delito de porte ilegal de armas, en calidad de autor, dispuesta en el año 1999. En consecuencia, junto con el rechazo se dispone el abandono en un plazo de 15 días a contar de la fecha de notificación. En dicha resolución se cometió un error involuntario en la individualización del amparado, señalando como su nombre “Carlos Eduardo TRUJILLO CUERO”, lo que fue rectificado mediante Resolución Exenta de 06 de abril de 2018.

Añade que, mediante Oficio Ordinario N° 113849, de fecha 29 de septiembre de 2018, requirió nuevos antecedentes al amparado, debiendo acompañar: Copia de la sentencia que lo condenó a 1 año de prisión por el delito de porte ilegal de armas, del Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali, Valle del Cauca; Copia de la sentencia que lo condenó a 10 meses y 15 días de prisión por el delito de violación a la ley 30/86, del Juzgado 2 Penal del Circuito de Cali, Valle del Cauca; Certificado de cumplimiento de las penas anteriormente señaladas; Certificados que acrediten sus vínculos familiares en Chile, si los tuviere; antecedentes que acrediten su sustento económico en Chile, tales como contrato de trabajo, oferta de trabajo, declaración jurada de expensas, certificado de cotizaciones previsionales, etc.

Explica que el recurrente concurrió a la Gobernación Provincial Cordillera, en la comuna de Puente Alto, y solo acompañó contrato de trabajo, pagos de AFP y liquidación de sueldo, e ingresó un recurso de reconsideración en contra de la resolución que había rechazado su solicitud de visa y dispuso su abandono del país. De lo anterior tomó conocimiento el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Oficio N° 1.077, de fecha 6 de noviembre de 2018, remitido por la Gobernadora de la Provincia de Cordillera. En este contexto encontrándose pendiente la resolución de dicho recurso, el amparado solicitó regularización de su situación migratoria conforme el proceso extraordinario creado a efecto por Resolución Exenta N° 1.965, de fecha 9 de abril de 2018, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública.

Dicha solicitud fue rechazada mediante Resolución Exenta N° 82250, de fecha 28 de marzo de 2019, teniendo en consideración, tal como se expone en la resolución previamente individualizada que *“no se concederá el permiso a aquellos extranjeros comprendidos en los numerales 1,2,3 y 6 del artículo 15 y los numerales 1,2 y 3 del artículo 16 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería”*, pues el solicitante registra antecedentes negativos en su país de origen, no cumpliendo así con lo que establece la normativa migratoria para otorgar un permiso de esta naturaleza. En tal sentido, refiere que el amparado no logró desvirtuar los fundamentos tenidos a la vista por la autoridad migratoria, atendida las condenas en su país de origen. Así las cosas, se mantuvo vigente la orden de abandono del territorio nacional en 72 horas.

Agrega que, por Oficio Ordinario N° 22785 de 24 de septiembre de 2020, remitido por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se volvió a requerir antecedentes al amparado para resolver su situación migratoria. En particular: copia de la sentencia que lo condenó por el delito de violación a la Ley 30/86, del Juzgado 2 Penal del Circuito de Cali Colombia; Copia de la sentencia que lo condenó por el delito de porte ilegal de armas, del Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali, Colombia; Informe de cumplimiento de condenas/certificado de cumplimiento en pena sustitutiva a la reclusión; certificado consular vigente de antecedentes penales en país de origen, emitido por el Consulado de Colombia en Chile; certificados que acrediten sus vínculos familiares en Chile, si los tuviere; antecedentes que acrediten su sustento económico en Chile, tales como contrato de trabajo, oferta de trabajo, declaración jurada de expensas, certificado de cotizaciones previsionales, etc.; otros antecedentes que estime relevantes para resolver su situación migratoria.

Aclara que se le concedió un plazo de 30 días para remitir la documentación requerida. No consta ingreso dando respuesta a esta solicitud ante la autoridad migratoria. No obstante, el extranjero solicita la regularización dispuesta en la Ley 21.325 y, por tanto, mediante Resolución Exenta N° 21184026 de fecha 14 de octubre de 2021, se le tuvo por desistido de todo trámite pendiente en materia migratoria, se

ordenó la tramitación de su solicitud de y se le otorgó una autorización de trabajo para desarrollar actividades remuneradas lícitas.

Señala que, si bien se admitió a trámite la solicitud, se pudo verificar que el extranjero no acompañó los documentos requeridos, aun cuando le fueron solicitados en al menos dos oportunidades, y teniendo a la vista los antecedentes indicados previamente, dicta el Decreto N° 5157, de fecha 30 de diciembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el que se ordena la expulsión del extranjero por todos los argumentos ya reseñados, notificado con fecha 23 de marzo de 2022.

Indica que, conforme lo expuesto, el Servicio Nacional de Migraciones rechaza la solicitud de regularización extraordinaria del amparado mediante Resolución Exenta N° 22176051, de fecha 03 de mayo de 2022, teniendo como fundamento las siguientes consideraciones, expuestas en dicha resolución: Presenta antecedentes negativos en su país de origen, específicamente: Registra una condena en Colombia como autor del delito de Violación a la Ley 30 de 1986, a la pena de 10 meses y 15 días de prisión, dispuesta el año 1999, y condena por el delito de Porte Ilegal de Armas, pena de 1 año de prisión, dispuesta el año 1999; se encuentra expulsado mediante, Decreto N°5157, de fecha 30 de diciembre de 2021, dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, notificado con fecha 23 de marzo 2022, por Policía de Investigaciones de Chile.

Seguidamente, argumenta que el decreto impugnado ha sido dictado dentro de la esfera de competencias de la autoridad migratoria, por causales legales habilitadas que le permiten adoptar la medida en cuestión. Adicionalmente, considera preciso señalar que no hay constancia de solicitudes adicionales del recurrente tendientes a regularizar su situación migratoria, existiendo diversas regularizaciones migratorias a las que pudiese haber optado amparado en la vigencia de la normativa migratoria imperante en ese momento.

Prosigue señalando que la medida adoptada tiene justificación en la legislación aplicable, y al efectivo invoca la causal prevista en el artículo 63 N° 4 del DL N° 1094. En tal sentido, a propósito de la procedencia de la medida de expulsión, invoca lo previsto en el artículo 84 inciso primero de la misma normativa, y expresa que el

amparado incumplió los requisitos para obtener la regularización migratoria que pretende, los que constan en Resolución Exenta N°1769 de fecha 20 de abril de 2021, que en este caso correspondía no tener antecedentes penales ni en Chile ni en su país de origen. Al tener antecedentes penales no cumplió con el artículo octavo transitorio de la ley 21.325

Adicionalmente, en la resolución que rechaza la regularización se indica que se mantienen vigentes las resoluciones que expulsan o prohíben el ingreso al país dispuestas en contra del recurrente, por lo que la expulsión que se dictó en Decreto N° 5157, de fecha 30 de diciembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conserva plenamente su vigencia. Finalmente, no concurriendo acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de su derecho a la seguridad individual y libertad personal, no siendo procedente por ende que sea dejada sin efecto la Resolución que dispone la medida de expulsión del país que indica, solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”. De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que: “El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

Cuarto: Conforme al alegato de las partes, al recurrente se le han rechazado solicitudes de visa y reconsideración administrativa, lo que dio lugar a orden de abandono del territorio nacional, por registrar antecedentes penales, situación que se

replicó en su solicitud de regularización conforme al artículo 8 transitorio de la Ley N° 21.235; todo lo cual motivó que, en definitiva, se expidiera en su contra la orden de expulsión impugnada en estos autos.

Quinto: Que, habiendo sido expedida dicha orden por autoridad competente, dentro de sus facultades legales y estando debidamente fundada, en la existencia de antecedentes penales anteriores del recurrente, no se visualiza la existencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que el presente recurso será desestimado.

Sexto: Que, la recurrente alega la prescripción y extinción de sus antecedentes penales, habiendo la autoridad administrativa solicitado antecedentes, los que no acompañó el recurrente, ni tampoco existen antecedentes en esta causa que acrediten que se haya declarado la prescripción o extinción de la responsabilidad penales que da cuenta su extracto de filiación.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado aplicable, **se rechaza, sin costas**, el recurso de amparo interpuesto en favor de don Carlos Edwerd Trujillo Cuero, y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Amparo-980-2022.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Suplente Enrique Faustino Duran B., Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

